

EL FUJIMORISMO COMO FORMA DE GOBIERNO

Heraclio Bonilla

Universidad Nacional de Colombia

El Perú, una vez más, se ha convertido en las últimas semanas en el centro de la curiosidad internacional. Como en anteriores oportunidades, no precisamente por las mejores razones. Desde el pasado mes de junio, en efecto, ese país ha sido el escenario de una serie de peripecias que despiertan sentimientos mezclados de asombro y de bochorno. Los acontecimientos más saltantes de esa zaga fueron la convocatoria a elecciones generales, y en las cuales uno de los candidatos era el Ing. Alberto Fujimori Fujimori, presidente en ejercicio del Perú y cuya discutible candidatura por tercera vez fue posible por una no menos discutible interpretación de la ley por parte de una mayoría adicta en el Congreso de la República. Pese a las ventajas obvias de ser candidato cuando al mismo tiempo se es presidente, los resultados deliberadamente demorados del escrutinio no le permitieron alcanzar la mayoría absoluta que esperaba, razón por la cual tuvo que resignarse a una nueva contienda electoral, en medio de los reclamos de fraude por parte de su contendor más cercano Alejandro Toledo, el segundo candidato más votado en la primera ronda electoral. La segunda vuelta electoral, realizada un mes después de la primera, tuvo como único actor al candidato presidente, ante la decisión de Toledo de retirarse de la contienda aduciendo falta de garantías para el desarrollo de una lid impecable y porque seguramente presentía una derrota segura en el caso de que terminase presentándose. La inauguración del tercer mandato presidencial del Ing. Fujimori, sin precedente en toda la historia del Perú, fue el 28 de julio, ocasión en que los adversarios del presidente re-electo realizaron una demostración de la fuerza que lograron acumular en los meses recientes. Esa marcha de los Cuatro Suyos terminó con el saqueo y el incendio

de edificios públicos como el Banco de la Nación, y con la muerte por asfixia de un grupo de sus guardianes. El presidente había ganado el control del poder ejecutivo, pero no tenía asegurada una confortable mayoría en el Congreso, razón por la cual el imperativo inmediato era revertir esa situación. La tarea fue asumida por el abogado Vladimiro Montesinos, el verdadero poder detrás del trono según el juicio de amigos y adversarios, quien desde las oxigenadas oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional y cuyo control tenía a su cargo, se encargó en la tradición más conocida del continente de comprar el voto y la adhesión de parlamentarios de la oposición. Que esos “tránsfugas”, como los califica la oposición, fueron debidamente filmados en esa muy peculiar transacción, y cuyo valor de la misma haya sido un centésimo de los honorarios percibidos por “Pacho” Maturana, el hasta hace poco entrenador de la selección peruana de fútbol, hace parte de la pequeña historia y dice mucho de cómo se practica la política y del precio tan bajo que mucha gente asigna a su conciencia. Paralelamente, y como parte de este escenario ya bastante surrealista, se realizaba una conferencia de prensa del presidente Fujimori, acompañado del hasta entonces enigmático asesor Montesinos, en la cual anunciaba el desmontaje de un importante contrabando de armas desde Jordania y con destino a una de las fracciones de la subversión en Colombia. Esa revelación, sin embargo, no terminó por convencer ni al Pentágono ni al Gobierno de Colombia, y contó más bien con un enérgico desmentido del gobierno de Jordania quien sostuvo que se trataba de una venta legítima de armamento y que su desviación ulterior era más bien responsabilidad del gobierno peruano. El penúltimo incidente fue la entrega del video al Sr. Fernando Olivera, del Frente Independiente Moralizador, a través de canales que se desconocen pero con la presumible participación de oficiales opuestos a los modales del Dr. Montesinos, en la que se registraba la operación de soborno del congresista Kouri, hermano del actual alcalde de la provincia constitucional del Callao, para que se pasara a las filas del oficialismo, con la posterior difusión del mismo a través de un canal de la televisión por cable. El último episodio de esta tele-novela muy latina fue la huida clandestina del Dr. Montesinos a Panamá, la cloaca del continente en la dura apreciación de su ex-presidente Endara, abrumado por el descubrimiento de su papel central en esa peculiar transacción mercantil, pero no sin antes ofrecer una prueba de resistencia al presidente Fujimori. El viaje a Panamá fue impuesto por Montesinos, amparado por el gobierno de Fujimori quien solicitó para su asesor el asilo territorial pese a que era su protegido y no su perseguido, y en el marco de una complicidad completa de casi todos los gobiernos del Hemisferio y de la mismísima Organización de los Estados Americanos y con el madrinazgo de la Sra. Secretaria del Departamento de

Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Una lacónica carta de agradecimiento a Montesinos de Fujimori por los importantes servicios prestados cierra, por ahora, esta increíble trama.

No es esta, por cierto, la primera vez que el Perú se convierte en un espeluznante laboratorio para examinar en pequeñas dimensiones y problemas que caracterizan la cultura política del continente. En su pasado más cercano, desde fines de la década del 70 del siglo XX, la emergencia de un peculiar grupo de oficiales del ejército cansados de ser los “perros guardianes de la oligarquía”, en la colorida expresión de su líder Juan Velasco Alvarado, para luego iniciar cambios profundos pero inéditos en la tradición castrense del continente, así como la alucinante década de los 80 como consecuencia del fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, terminaron por transformar al país y a su experiencia en una celebridad, traducida en incontables libros, artículos, tesis y folletos orientados al desciframiento infructuoso de estos enigmas. En la coyuntura actual se requeriría mucha investigación y mucho espacio para dar cuenta, con profundidad y responsabilidad, de cada una de las inflexiones detalladas en el párrafo anterior. Como no es este el lugar para ese tipo de ejercicio, quisiera solamente proponer algunas consideraciones en torno a esa forma peculiar de gobernabilidad que es el fujimorismo y a las razones de su erosión.

Los adversarios del presidente Fujimori, encandilados por las dificultades que hoy confronta, suelen olvidar algunos hechos esenciales y que en sí mismos explican en gran parte la perdurabilidad de su gobierno, más allá del abuso del poder y de los fraudes en la competencia electoral. En 1990 ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al Sr. Mario Vargas Llosa y en 1995 obtuvo incluso una victoria más contundente sobre Javier Pérez de Cuellar, el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, ambos personajes con pergaminos evidentes. La victoria electoral de Fujimori en ambas ocasiones constituye un hecho inédito en los anales de la política peruana, porque antes el ingreso de un no blanco al palacio de gobierno sólo era posible mediante un golpe de estado, como lo ejemplifican las experiencias de Luis M. Sánchez Cerro, Manuel Apolinario Odría, o el ya mencionado Juan Velasco Alvarado. Que un hijo de japonés haya sido capaz de una hazaña de esa envergadura dice mucho de los profundos cambios ocurridos en el Perú desde la década de los sesenta, cambios en cuyo desencadenamiento jugaron un papel central, aunque por razones opuestas, tanto el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas como Sendero Luminoso. En 1992, dice la letanía de sus adversarios, Fujimori suprimió la legalidad institucional del país, al disolver al Congreso, al Poder Judicial y al poner de lado a los partidos políticos mediante la práctica de una

democracia plebiscitaria. Pero esos críticos al defender las formas pasan por alto que esas decisiones contaron con un inmenso respaldo popular, como consecuencia del mismo repudio que la opinión pública tiene hoy al Congreso y al Poder Judicial nombrado por y para el gobierno de Fujimori. Y con relación a los partidos políticos, es realmente poco serio nombrar como tales a las juntas esporádicas de notables, auto-elegidos por ellos mismos, que luego de redactar un programa de gobierno que no tiene relación alguna con la realidad que quieren gobernar o cambiar, pasan al asalto de las masas con promesas que no cumplen y en medio de la irresponsabilidad más completa, para luego volver a interesarse en esos electores con ocasión de la próxima contienda electoral. Partidocracias que por lo mismo no practican la democracia que predicán para fuera. Pero Fujimori tuvo además inocultables triunfos que la opinión pública y sus más encarnizados adversarios reconocen. Entre estos se cuentan: el control de una monumental inflación de cuatro dígitos en el marco de una brutal política de estabilización, contradiciendo las promesas que hiciera en la campaña política de 1990 y razón por la cual los electores optaron por un oscuro profesor universitario frente a los pergaminos bien conocidos de Vargas Llosa; la lucha eficaz contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) cuyos actos sembraron el terror entre las clases medias y las clases propietarias; la firma de un acuerdo de paz durable con el Ecuador y que sólo quienes comparten un nacionalismo tribal cuestionan; el impresionante despliegue de una política de obras públicas que llevaron servicios básicos como el agua y la luz a los grupos más aislados del país. Solo así puede entenderse que tres de los cuatro pobres del país votaran por Fujimori en las contiendas electorales de 1990, 1995 y del 2000. Por supuesto que está el pasivo del gobierno de Fujimori y éste es inocultable: basta señalar el empobrecimiento absoluto de inmensas mayorías de la población y de que el Perú comparta hoy con la India el triste privilegio de ocupar los primeros rangos con población mal nutrida. Reprochárselo, como algunos lo hacen, sería un acto de incautos y expresión de ingenuidad. No fue elegido para traer felicidad y paz entre los hombres, sino para afinar las piezas que permitan una subordinación más completa y eficiente de esa lúgubre aldea que es el Perú en el marco de un escenario cada vez más internacional. Y eso lo hizo admirablemente bien y con plena conciencia: hasta hace poco se jactaba que su gobierno no sólo pagaba la deuda, sino que en su pago se adelantaba a los plazos.....

Pero para que un gobierno de este tipo pueda mantenerse y perdurar son a la vez necesarias algunas premisas. Es otro signo de los tiempos que Alejandro Toledo, su principal opositor, haya sido hasta hace poco un funcionario menor

del Banco Mundial y que elija precisamente a los Estados Unidos de Norteamérica como escenario para expresar sus agravios. Las dictaduras siniestras que antes promovía y apoyaba el coloso del norte no constituye por ahora, por lo menos en este Hemisferio, su forma de intervención. Lo son, en cambio, la defensa de la democracia y de los derechos humanos, la oposición radical al narcotráfico y en ese sentido juegan un papel objetivamente progresivo. Sólo que esa delicada flor que es la democracia en la América Latina no es en sí suficiente para encender los corazones y las mentes de la gente del continente, como lo evidencia la experiencia reciente de Venezuela cuya población, pese a contar con la democracia más longeva de la región, no tuvo sin embargo pudor alguno en respaldar masivamente, una y otra vez, al colorido presidente Chávez cuyas credenciales democráticas son bastante discutibles, por decir lo menos. Por lo mismo la fórmula de Fujimori, al igual que el de Bordaberry en el Uruguay de 1973, era inmejorable para los nuevos tiempos. Esa fórmula consistía en una autoridad con fachada civil, que contara con el apoyo efectivo de las Fuerzas Armadas cuyos miembros estaban convencidos que la reconstrucción de un nuevo orden requería el control del poder por un largo tiempo, además de la complicidad de una clase propietaria ávida de apoyaturas que le permitieran la acumulación de riquezas en el nuevo escenario. La reproducción de su poder supuso la atomización completa de la sociedad civil, a fin de que el nuevo príncipe pudiera practicar “su” democracia directa en condiciones de inexistencia completa de toda forma de resistencia a las políticas implementadas. El arquitecto de esta articulación fue el asesor Montesinos, a través de mecanismos similares o peores al documentado por el ahora célebre video. Se mantuvo hasta el límite mismo en que el escenario social y político continuara inmutable, pero empezó a cambiar cuando una oposición amorfa empezó a tomar forma a través de las protestas en las calles y cuando un segmento de la clase propietaria, los industriales, empezaron también ellos a sentir los embates de una política económica recesiva. Es otro signo de los nuevos tiempos, que los ministros de Economía y de Agricultura que Fujimori nombrara en el nuevo gabinete del mes de julio pasado sean justamente empresarios en bancarrota.

Pero una cosa es la protesta popular frente a la política y a los escándalos del gobierno, y otra muy distinta es el liderazgo que dice representarla. El Sr. Toledo creció en popularidad no por sus propias virtudes, sino como expresión de rechazo a Fujimori, de la misma manera que este último lo hiciera frente a Vargas Llosa en 1990. Antes de que los electores lo consagraran como el líder natural de la oposición, esta última estuvo dividida en una docena de fracciones. Se volvieron a unir dada la fuerza alcanzada por Toledo como expresión del repudio de los votantes a las ambiciones desmedidas de los otros líderes, pero

ese matrimonio por conveniencia tampoco parece ser durable. Las fisuras vuelven a aparecer, los candidatos otra vez se multiplican, la “expropiación del protagonismo” es la frase que designa ahora las sordas luchas por el poder entre unos cuantos bajo la coartada de defender la democracia. Tanto Barrington Moore en su magistral *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, como Perry Anderson en sus intentos por discutir la pertinencia de sus tesis para la América Latina, han presentado las bases estructurales que permiten la emergencia de variantes democráticas como autoritarias en la ruta hacia la modernización. Olvidaron, sin embargo, sus correlatos culturales. La democracia significa también, y sobre todo, tolerancia, el respeto irrestricto a la diferencia, y la convicción en la igualdad de la gente de todas las sangres, para evocar el título de la espléndida novela de José María Arguedas. Pero, precisamente, esos son valores muy escasos en estos tiempos y por estos mundos.

El antecedente inmediato para explicar el proceso singular del Perú de hoy lo constituye la década de los 80, desde el término de la llamada “segunda fase” del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, y que incluye el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), y el primero del APRA bajo la conducción del Dr. Alan García Pérez (1985-1990). Más allá de los matices que distinguió a uno y otro gobierno, esa década estuvo caracterizada por el comienzo de la desaparición de los partidos políticos, proceso iniciado por la crisis de Acción Popular, el partido del Arq. Belaúnde, y la Democracia Cristiana liderada por Héctor Cornejo Chávez; el desmoronamiento del Estado, bajo la acción convergente de Sendero Luminoso, la banca privada internacional que se apropiaba del 42.4 % de los gastos públicos a título de pago de la deuda externa, y la borrachera populista del joven y carismático presidente Alan García Pérez. Paralelamente, la sociedad se informalizó. Los grupos de presión de la sociedad civil, como partidos, sindicatos, y gremios o desaparecieron o se pulverizaron, para dejar en su lugar los “clubes de madres” o los “comedores populares” de los barrios pobres que fueron creados como simples mecanismos de sobrevivencia en medio de la miseria más espantosa. La importancia del sector informal, cuyo inicio data de esa década para expandirse en los 90, puede medirse en el hecho de que cerca de las dos terceras partes del Producto Nacional Bruto se genera en este sector, habiendo sido celebrado su dinamismo por Hernando de Soto en un libro internacionalmente popular titulado *El Otro Sendero*. Su autor dijo que expresaba la creatividad de los sectores populares, y que era la respuesta más genuina frente a las trabas burocráticas de un Estado rentista como el del Perú. Estos juicios no carecen de fundamento, pero soslayan el hecho mayor de que la “informalización” de la economía tanto en ese país como en el conjunto de

la región, constituye la simple traducción de la incapacidad del sector formal de absorber el creciente excedente de mano de obra, y de la ineficiencia productiva de las empresas como consecuencia de la protección arbitraria de que fueron objetos para respaldar su crecimiento. El empequeñecimiento del Estado, por otra parte, se expresó en el desmontaje de las empresas controladas por el capital estatal, la reducción de la presencia del Estado en la economía, y la virtual desaparición de los gastos sociales, considerados entonces poco compatibles con el establecimiento de una política fiscal sana y disciplinada.

El retorno al sistema democrático desde 1980, así como el alcance y la naturaleza de las políticas económicas que implementaron los gobiernos de Belaúnde y de García, a su vez se explican por el proceso iniciado en 1968 y que concluye con la instalación de la Asamblea Constituyente de 1978. En ese año, 1968, un grupo de oficiales del Ejército peruano liderados por el general Juan Velasco Alvarado decidieron, con el lenguaje crudo que los caracterizaba, no seguir “siendo los perros guardianes de la oligarquía”, y en consecuencia implementaron un impresionante paquete de reformas, desde la agraria hasta la industrial, pasando por el Estado, la educación, las finanzas, los medios de comunicación. Estas políticas, por cierto, no aparecieron desde el aire, sino que a su vez fueron la respuesta a una serie de procesos que estuvieron en curso desde dos décadas antes. Para comenzar, la creación en 1953 del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), la de la Escuela Superior de Guerra en 1954, y poco más tarde el Servicio de Inteligencia, permitieron una socialización política de un nuevo tipo a estos oficiales, al mismo tiempo que la doctrina de “seguridad interior”, asociada al accionar de las guerrillas y de las invasiones campesinas de las haciendas en la década de los 50 y de los 60 en la sierra central y sur del país, terminó por convencerlos que el enemigo estaba ahora en casa y no fuera, y que si querían evitar la destrucción institucional del país era urgente implementar un conjunto de reformas que ni los partidos ni los civiles podían o querían hacerlo. Estas reformas cancelaron los vestigios oligárquicos y de antiguo régimen en el Perú, desalojaron al capital internacional para colocar sus empresas bajo directo control del Estado, nacionalizaron la banca, repartieron la tierra, y otorgaron participación a los obreros en el capital y en la gestión de las empresas industriales reformadas. Para estupor de eso que se llamó izquierda en el Perú, sus militantes contemplaban que una a una de sus banderas reivindicativas les eran arrebatadas por estos enigmáticos oficiales. Con todo, el modelo que implementaron y al que denominaron “ni comunista ni capitalista”, terminó en la práctica acumulando los defectos de ambos. Se trató, en suma, de corporativizar a la sociedad peruana, de agrupar a sus miembros a partir de las funciones que desempeñaban, para luego subordinarlos

al control directo del Estado. Ni los partidos ni los sindicatos eran considerados necesarios, en un contexto en que ahora todos eran iguales. Igualdad exóticamente expresada en la obligatoriedad de los escolares de usar un uniforme idéntico, pese a que las clases propietarias restablecieron pronto el signo de distinción utilizando telas de mejor calidad en la confección del uniforme de sus hijos.....

La distancia existente entre la realidad y la retórica de este modelo no tardó en aparecer. Por una parte, en el campo la tierra era insuficiente para satisfacer las necesidades de todos los campesinos, además de que la constitución de empresas asociativas dejaba insatisfecha la aspiración del campesino de ser propietario, para terminar estableciendo una esquizofrenia colectiva al no poder diferenciar su rol como trabajador y como propietario colectivo de estas cooperativas. La misma indisciplina laboral afectó negativamente el rendimiento de las empresas industriales cuyos trabajadores, además, estuvieron subordinados ahora a la burocracia del Estado. Las tensiones políticas dentro del establecimiento militar, la presión y el asedio del capital internacional y de la desplazada clase propietaria nacional, el re-inicio de protestas de las clases medias y populares, dieron inicio a la llamada “segunda fase” del gobierno militar, liderada esta vez por el general Francisco Morales Bermúdez luego de un exitoso golpe de Estado en 1973. Esta segunda fase fue básicamente la del desmontaje de las reformas radicales implementadas en la primera, y concluyó, como ya se ha mencionado, con la convocatoria de la Asamblea Constituyente que produjo la Constitución de 1979 que otorgaba por vez primera voto a los analfabetos y a los mayores de 18 años de edad, pero que al mismo tiempo fue el espacio para la negociación del retiro ordenado de las Fuerzas Armadas del escenario público.

La política del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas liquidó las bases del antiguo régimen en el Perú. Canceló la propiedad de la tierra de hacendados tradicionales y modernos, reconoció la dignidad de la población indígena al otorgar al quechua la condición de lengua nacional, otorgó al Estado y a su política exterior una prestancia que no conocía, creó el piso político para la emergencia de una izquierda que alcanzó a representar la tercera parte de la Asamblea Constituyente y que incluso conquistó la Municipalidad de Lima en 1983. Destruyó todo, pero no estableció nada a cambio. Y es de ese vacío de dónde emerge poco más tarde Sendero Luminoso. Pero la comprensión de la idiosincrasia militar requiere, a su vez, caracterizar el orden político oligárquico de 1930 a 1968. Como todo escolar sabe muy bien, las actuales Repúblicas de la América Latina nacieron de la disolución prematura del pacto colonial. Salvo un par de excepciones, la trayectoria seguida por cada una de ellas hasta los comienzos del último tercio del siglo XIX estuvo signado por el caos, la

inestabilidad, la profunda precariedad económica. Los gobiernos eran ejercidos por un número inacabable de caudillos, civiles o militares, cuya fuerza reposaba en las armas, o en la capacidad de distribuir las pocas prebendas existentes para comprar la lealtad de sus clientes. Pero desde el último tercio de ese siglo hasta el estallido de la crisis de 1929, tanto la situación económica como política se alteraron dramáticamente. Las economías de exportación se reactivaron, los partidos políticos nacieron, la maquinaria burocrática del Estado se hizo más numerosa y más densa, a la vez que el capital internacional, a través de inversiones de portafolio o de inversiones directas, asumía el control de las finanzas y de los recursos productivos de la región. La traducción política de estas maneras de gobernar se denomina en la América Latina oligarquía, la cual básicamente es el resultado de una articulación, en la cima, del capital internacional y del capital privado nacional que controló la agricultura o la minería de exportación, mientras que a nivel regional, y como consecuencia de la debilidad nacional de esos Estados, el control político continuó siendo ejercido por los poderosos caciques locales o regionales y quienes, ellos mismos o sus representantes, tenían también presencia en el Poder Legislativo. Luego de la derrota militar del Perú frente a Chile (1879-1884), la reconstrucción económica y política del país fue implementada en el marco de este pacto oligárquico, y cuyas expresiones políticas fueron sucesivamente los partidos Demócrata de Nicolás de Piérola, el Constitucional de Andrés A. Cáceres, y el viejo Partido Civil fundado en 1871 por Manuel Pardo.

En el caso del Perú, entre 1919 y 1930, el presidente Augusto B. Leguía elegido por vez primera en el marco de una contienda electoral pero que se mantuvo en el poder por golpes de Estado sucesivos, había intentado inicialmente cambiar este rumbo oligárquico a fin de construir lo que él denominaba una “patria nueva”. En función de ese objetivo consolidó el poder de su gobierno sobre las autonomías políticas regionales, apeló al capital internacional, modernizó la infraestructura urbana y vial del país, desterró a los miembros más prominentes del sector terrateniente, y expandió la arena electoral. Cabe recordar que en 1919 sólo el 2.5 % de la población votaba, mientras que la casi totalidad estaba excluida por ser analfabeta, por ser mujer, o por ser menor de 21 años de edad, o por una combinación de cualquiera de las características anteriores. Un gobierno que sustentaba el gasto público en los préstamos de la banca norteamericana y cuya economía dependía de la exportación de minerales o de productos agrícolas como el algodón y el azúcar, no pudo ser inmune al vendaval de 1929. Leguía fue echado por un golpe de Estado, asesinado poco después, para dar paso al efímero gobierno del coronel Luis M. Sánchez Cerro en el marco de una impresionante violencia y de la brutal matanza en las ruinas

de Chanchán, en Trujillo, el 11 de julio de 1933. Los miles de muertos de esa jornada terminarán colocando de manera durable la inmolación de los Apristas en la memoria colectiva del pueblo, al mismo tiempo que alimentará, conjuntamente con la travesía del desierto de su líder y fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, la convicción de sus militantes en su predestinación y en su fortaleza.

Pero la tragedia de un pueblo y un partido, para evocar el título de un conocido libro destinado a evaluar el desempeño político del APRA, tuvo también consecuencias en el orden social y en la manera de gobernar el Perú. La emergencia del partido de Haya de la Torre y el virtual monopolio que tuvo en la arena política del Perú, lo convertirá en uno de los actores políticos centrales hasta el advenimiento de la dictadura militar con Velasco Alvarado en 1968. Fueron décadas, como recuerda Sinesio López en su importante libro *Ciudadanos Reales e Imaginarios* (Lima: Instituto de Diálogo y Propuestas, 1997. 257-259), en que el partido procesó mutaciones importantes en el enunciado de su doctrina, limando las aristas más filudas en su estrella simbólica de cinco puntas, para apostar de manera sucesiva y contradictoria por un cambio con revolución (1931-1944), por cambios dentro de la democracia (1945-1948) y, finalmente, por la democracia a costa de los cambios (1956-1969). El segundo actor político fueron las Fuerzas Armadas, como garante del orden oligárquico y como sostén de la plutocracia oligárquica, el tercer actor, y cuyo imperio de esta última en el terreno de la economía siguió siendo inmovible. Salvo la primavera democrática representada por el gobierno del jurista José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948), y la primera intervención institucional de las Fuerzas Armadas con el general Lindley (1962-1963), esta tripartición del poder estuvo también presente en los gobiernos de la “convivencia” con Manuel Prado (1956-1962), y en el primero de Belaúnde Terry, con su nuevo partido Acción Popular y su aliado la Democracia Cristiana (1962-1968), gobiernos democráticos que reemplazaron el “ochenio” dictatorial de Manuel A. Odria, cuyas andanzas y la de su Ministro del Interior Esparza Zañartu fueron immortalizadas por Vargas Llosa en las páginas vibrantes de su *Conversación en la Catedral*.

Formas cambiantes, al final de cuentas, que sin embargo como señala también Sinesio López (pp. 248-249), no ocultan una continuidad básica, aquella heredada desde la instalación del sistema colonial y cuyas características fueron persuasivamente analizadas por Richard Morse en sus libros *El Espejo de Próspero y Resonancias del Nuevo Mundo*. Y es que hoy como ayer, el Presidente sigue siendo el viejo príncipe de antaño, que hace de su gobierno el monopolio privado del poder público, mientras que los funcionarios de la densa

burocracia pública, bajo la coartada de servir al orden público, terminan igualmente apropiándose privadamente de estas funciones, de manera semejante a lo que tenía Weber en mente cuando describía a los “patrimonial retainers” y pensaba sobre el funcionamiento de los anacrónicos sistemas políticos tradicionales.